

## El debate político en Venezuela a inicios del siglo XXI

### *Political debate in Venezuela at the dawn of the 21<sup>st</sup> century*

Rodolfo Magallanes

#### Resumen

En este artículo nos proponemos caracterizar desde una perspectiva académica la naturaleza o calidad del debate político actual en Venezuela. Para ello buscamos hacer particularmente notables los principales aspectos “disfuncionales” que, a mi juicio, lo entranan y limitan, impidiéndole constituir un ejercicio “productivo” que eleve la calidad del proceso de toma de decisiones colectivas, promueva un ambiente de convivencia política y contribuya a generar progreso social. Justificamos este interés en cuanto consideramos que el tratamiento adecuado del debate político determinará –en una parte importante– la evolución del sistema político venezolano. Pretendemos extraer finalmente de este análisis algunas consecuencias prácticas y recomendaciones de política institucional que nos ayuden, en la actual coyuntura venezolana, a crear espacios institucionales que contribuyan al desarrollo social en un marco democrático y de tolerancia.

#### Palabras clave:

Venezuela; Democracia; Debate político; Conflicto político; Pluralismo

#### Abstract

This article aims to characterize, from an academic perspective, the “nature” or quality of current political debate (“public contestation”) in Venezuela, particularly noting its dysfunctional aspects including: polarization, deinstitutionalization, degradation, irrationality, underestimation of political knowledge and political experiences, opportunist behavior, appellation to military forces, excessive concentration in presidential figure and international intervention. These elements make it difficult to foster a positive environment which could contribute to social progress. This issue is important because an adequate public debate plays an important role in the evolution of Venezuela’s political system. In addition, this analysis provides some recommendations to create new institutional spaces that can contribute to efforts towards social development within a democratic and tolerant framework.

#### Key words

Venezuela; Democracy; Political debate; Political conflict; Pluralism

---

Recibido: 16-05-2007

Aprobado: 31-05-2007

Un estudio de la evolución de las actitudes de los venezolanos hacia su sistema político nos permite poner en perspectiva los antecedentes de la índole actual del debate político en nuestro país, las razones de los argumentos o temas que trata, los motivos de las posiciones políticas que se destacan, así como los fundamentos de las matrices de opinión que se han conformado. Este esfuerzo está guiado, a su vez, por la intención de que una mejor comprensión de estos tópicos nos permite alcanzar un mejor tratamiento de nuestras diferencias políticas y avanzar en la capacidad del sistema político venezolano para atender los problemas sociales y producir bienestar general de manera sostenida o prolongada en el tiempo.

El insuficiente crecimiento económico experimentado en Venezuela desde comienzos de los años ochenta<sup>1</sup> ha servido de marco y constituido factor clave en la explicación de la evolución de las opiniones de los venezolanos sobre su sistema político. Las diferencias entre las evaluaciones del sistema político venezolano, realizadas en períodos de prosperidad y crisis económica, son muy significativas, para no desestimar el impacto de esta variable en la explicación de las modificaciones de las mismas (véase Torres, 1990).<sup>2</sup>

A lo largo de este período se hizo notable el deterioro progresivo de la imagen de los venezolanos sobre los principales actores políticos y las instituciones públicas. Esta opinión negativa se fue extendiendo y acentuándose, en la medida en que se prolongaba la crisis económica y fallaban las acciones adoptadas por los sucesivos gobiernos, para hacerle frente a ella y al deterioro de la calidad de vida que generaban en amplios sectores de la sociedad venezolana (Molina Vega y Álvarez Díaz, 2004). Un estudio de inicio de los años noventa reconocía, sobre la base del análisis de estudios pioneros de opinión pública: "...a lo largo de la década 1973-1983 se ha operado un deterioro en la evaluación que los ciudadanos hacen de los gobiernos democráticos en general... En 1983, los venezolanos pensaban en mayor medida que los gobiernos democráticos habían 'malgastado el dinero', que habían habido 'muchos sinvergüenzas' en los gobiernos, y que los

<sup>1</sup> El crecimiento promedio anual entre 1984-98 fue -1,05%.

<sup>2</sup> Sobre las causas del cambio negativo en las actitudes de los venezolanos hacia su sistema político, un experto nos dice: "...en una primera aproximación, debemos distinguir entre las causas económicas y las causas políticas del deterioro de las actitudes hacia el sistema democrático venezolano. En el primer grupo encontramos la inflación, el desempleo y la recesión económica. Entre las causas políticas nos referimos a la corrupción, las percepciones del público sobre la demagogia, los problemas no resueltos, la falta de acceso de la ciudadanía, las variaciones del vínculo partidista, etc. Obviamente, ambos tipos de factores interactúan..." (Torres, 1990:185).

gobiernos democráticos habían servido a ‘los intereses de grupos poderosos’...” (Torres, 1990:181).<sup>3</sup> La evaluación negativa hacia los principales actores y representantes del sistema político venezolano estuvo acompañada, además, por el descenso de la proporción de ciudadanos que se reconocían a sí mismos como militantes o simpatizantes de un partido político, el crecimiento de la abstención electoral, la variabilidad de los resultados electorales y la ocurrencia de ciclos que se originaban en el desgaste rápido del partido en el gobierno y la victoria del principal partido de oposición en las próximas elecciones. Esto sucedió a partir de 1968, especialmente durante los años setenta, con la excepción de las elecciones presidenciales de 1988. Estas tendencias se acentuaron durante los años noventa debido a la emergencia de partidos políticos no tradicionales, con una plataforma política antisistema, y con opción real de poder, acompañada de una disminución del porcentaje de votos obtenidos por los dos partidos tradicionales del sistema político venezolano<sup>4</sup> (ver Molina Vega y Álvarez Díaz, 2004:35ss.). A pesar de la magnitud que la evaluación negativa del desempeño de los gobiernos alcanzó entre la población, ésta no provocó una disminución notable de sus preferencias por un sistema democrático, al menos hasta los años noventa, sino que más bien indicaban –principalmente– su disposición a optar por una perfección o profundización del mismo: “...es notable que el nivel de personas en desacuerdo con el sistema político permaneció estable durante los años de prosperidad (1977) y parte de los años de crisis (1983, 1987 y 1988)...” (Torres, 1990:179). Para inicios de los años noventa se percibe el surgimiento de una opinión radicalmente crítica del sistema político existente hasta el momento: “(l)as actitudes hacia el sistema democrático en 1990 cambian; el porcentaje de personas que manifiesta el deseo de ‘cambiar’ el actual sistema democrático aumenta en diez puntos porcentuales, llegando a constituir un porcentaje apreciable de la población... Es también notable cómo las personas que se definen como “muy contentas” con el sistema, disminuyen de una cuarta parte en la década del setenta y del ochenta, a apenas 5,0% de la población...” (p. 178). A partir de este año se harían más importantes las divisiones ideológicas en la sociedad venezolana: “(l)a ubicación de los electores en el espectro izquierda-derecha, sin mayor relevancia electoral hasta las elecciones de 1988, adquiere importancia a partir de 1993, y la

<sup>3</sup> Esta opinión negativa era compartida, ya en 1990, ampliamente por casi todos los ciudadanos. Las cifras citadas en el estudio indicaban el universo de quienes opinaban que los gobiernos habían “malgastado el dinero” (84,1%), “beneficiado grupos poderosos” (82,6%), y han tenido entre sus miembros personas deshonestas, “con muchos sinvergüenzas” (82,5%). Véase Torres (1990:183).

<sup>4</sup> “Los partidos tradicionales de gobierno AD y Copei, cuya votación conjunta en las elecciones parlamentarias de 1988 había sido de 74%, la ven disminuir a 46% en 1993, 36% en 1998 y 21% en el 2000...” (Molina Vega y Álvarez Díaz, 2004:35).

ha mantenido desde entonces, tanto, que dentro de la inestabilidad que caracteriza el sistema de partidos venezolanos actual, pareciera posible distinguir dos bloques de fuerzas políticas, una a la derecha y otra a la izquierda...” (Molina Vega y Álvarez Díaz, 2004:38).

El marco de esta polarización ideológica ha estado conformado por la ocurrencia de eventos violentos y espectaculares de gran trascendencia política:<sup>5</sup> el “Caracazo”, en febrero de 1989; los dos intentos de golpe militar de febrero y noviembre de 1992; la salida forzada de la Presidencia de la República, a través de un mecanismo de *impeachment*, del presidente Pérez, todo lo cual ha estado acompañado de una creciente conflictividad social, que se tradujo también en constantes protestas callejeras, huelgas y otras expresiones de conflicto social, casi durante todo el período desde mediados de los ochenta y hasta la actualidad. A estos eventos habría que agregar los que se han producido más recientemente: la huelga nacional convocada en diciembre de 2001 contra el presidente Chávez; el golpe fallido de abril de 2002; la reinstalación de Chávez en la Presidencia, luego de menos de 48 horas de depuesto; el paro petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003; el referéndum revocatorio de 2004; el boicot electoral de diciembre de 2005, etc., todo lo cual contribuye a definir –como ya dijimos– un contexto de agitación política y amenaza constante a la estabilidad política, que motiva nuestra investigación sobre la forma del debate político actual en Venezuela y su capacidad para hacer frente a los potenciales efectos negativos de estas acciones.

## 1. NATURALEZA DEL DEBATE POLÍTICO ACTUAL EN VENEZUELA<sup>6</sup>

El carácter polarizado y agresivo de las opiniones que se exponen actualmente desde los extremos de las opciones políticas en Venezuela, plantea la conveniencia

<sup>5</sup> Una fuente muy cualificada para conocer la importancia de estos eventos está en López Maya (2005). Véase, también, López Maya (1999) y Salamanca (1999).

<sup>6</sup> La prensa escrita y los demás medios de comunicación son una fuente insustituible para el estudio de la situación venezolana durante los últimos años. Resultan, sin embargo, de mucho interés algunos de los estudios contenidos en la bibliografía citada, los cuales constituyen en nuestra opinión buenos análisis comprensivos de esta realidad. Véase, por ejemplo, los trabajos contenidos en Canache (2002); Ellner y Hellinger (2003); López Maya (2005); y el análisis introductorio de Teodoro Petkoff en el libro de Marcano y Barrera (2005). Para una comparación con procesos desarrollados en otros países de la región, es notable el caso argentino (Véase Cheresky y Pousadela, 2001). Consideramos también útil abordar el estudio de situaciones de polarización política a través de la comparación con rasgos que apuntan a la conformación de totalitarismos (Arendt, 1987).

de analizar las características del debate político, en particular su capacidad para tratar estas diferencias y mantener limitado el grado de conflicto social y político existente. Para ello, de seguida pensamos destacar los principales rasgos que lo dificultan, limitan o impiden, lo cual tendría consecuencias sobre la evolución probable del sistema político venezolano.

a) Polarización:<sup>7</sup> un rasgo principal del debate político venezolano en la actualidad es el ambiente de polarización política predominante.<sup>8</sup> Existe no sólo entre los extremos representativos del estatus actual del debate político en Venezuela, sino también al interior de ellos, visible –entre otros elementos– en la personalización del debate y en la escasa tolerancia a cualquier crítica interna o externa de las posiciones propias, que se exagera –en la medida en que han fracasado hasta ahora estrategias extraconstitucionales– particularmente en períodos electorales. En este contexto, los tópicos del debate se plantean en términos que no están exentos de cierto maniqueísmo. Los argumentos y aseveraciones son presentados conforme a esquemas ideológicos sencillos, en los que no hay contradicciones ni “lagunas”, y son evaluados en términos de la fuente, por lo que la determinación de su procedencia es suficiente para prestarles o restarles méritos. Los hechos y circunstancias no se evalúan, sino en el marco de una fuerte subjetividad que en algunos casos ha llevado a idealizar la existencia del propio bando o a rechazar la existencia del otro.<sup>9</sup> En el ambiente de polarización

<sup>7</sup> Como hemos podido ver (*vid. supra*), la polarización política en Venezuela no es un fenómeno reciente. Encuestas realizadas en 1983 recogían ya un gran pesimismo acerca del futuro entre los venezolanos. 40% de los venezolanos tenía una percepción negativa acerca de su futuro, y más de la mitad de ellos mostraba tener poca o ninguna confianza en las instituciones: Gobierno Nacional (70%), Poder Judicial (66%), Congreso Nacional (69%); por ejemplo, en 1998, año de la elección de Chávez, más de la mitad (78%) de los venezolanos opinaba estar poco o nada satisfecho con el funcionamiento de la democracia en Venezuela y la desconfianza con las instituciones había aumentado (RedPol, 1999). A partir de los años noventa las actitudes u opiniones políticas de los venezolanos comienzan a estar referidas más nítidamente a opciones ideológicas opuestas de “derecha” e “izquierda” (véanse Molina Vega y Álvarez Díaz, 2004; Molina Vega, 2001; Carrasquero y Welsch, 2000; Torres, 1990). Para una visión de largo plazo pueden leerse Templeton en Goodman *et al.* (1995), el interesante trabajo acerca de los orígenes de la polarización venezolana de Kenneth Roberts, en Ellner y Hellinger (2003:55-72), así como el trabajo de Canache (2002).

<sup>8</sup> Esta polarización es evidente a la luz de la ocurrencia de hechos políticos que revelan la adopción de opiniones, actitudes y la disposición a recurrir a medios extremos, tales como expresiones verbales violentas y que llaman explícitamente a la violencia, agresiones personales a quienes poseen preferencias políticas distintas a las propias, presiones desde y hacia los medios de comunicación de masas, presiones y recurso a mecanismos de coacción desde el gobierno y factores de la oposición política, huelgas patronales y sindicales, intentos de golpe de Estado, boicot electoral, paramilitarismo, terrorismo y sicariato, entre otras manifestaciones extremas que, afortunadamente, se han mantenido relativamente localizadas y con alcance limitado. Véase, también, Lozada (2004).

<sup>9</sup> Una muestra de lo dicho hasta aquí puede estar representada quizás en las opiniones de un profesor universitario y articulista político, identificado con la oposición venezolana, quien en un artículo recientemente

se pierde conciencia de los matices; los diversos asuntos sólo se ven en términos de contrastes y se exagera en las actitudes o respuestas, dificultando el diálogo entre las partes, fomentando la desconfianza recíproca e impidiendo el establecimiento de reglas que funcionen como garantías suficientes a las partes involucradas en el juego político, todo lo cual contribuye a dificultar la convivencia social y política. Ello no tiene que ver sólo con la existencia de diferencias evidentes sobre asuntos relevantes de la agenda política, tales como el tratamiento a la propiedad privada y al mercado, las normas que regulan al sistema electoral o los derechos humanos, puesto que estas diferencias son más notables en el ámbito de la retórica que en el ámbito real, ni tampoco la distancia inicial que pudiera haber en la percepción particular del modo como debería tratarse estos asuntos, sino que, en nuestra opinión, guardan relación principalmente con la poca disposición a tratar los asuntos de política dentro de un marco institucional general o universal, común y estable, cuya transformación o cambio estén sujetos a reglas democráticas, equitativas y transparentes, así como en el intento de manipular dicho marco para lograr ventajas personales o grupales más o menos permanentes.<sup>10</sup> Se trata, en nuestra opinión, de un conflicto entre dos propuestas excluyentes de dominación, cuyas versiones extremas estarían más o menos identificadas por la proposición aún vaga del “socialismo del siglo XXI” y las propuestas más o menos exclusivistas de nuevos movimientos de derecha en Venezuela.

En esta situación de polarización la opinión disidente se “criminaliza”, al menos en alguna medida, aparece el miedo al castigo por emitir opiniones diferentes a las de los factores enfrentados y se promueve una “cultura de temor”. Las opiniones libres –especialmente si son disidentes de la preferencia de quien ocupa una posición de poder o autoridad en el caso– son motivo de sanciones sociales

---

publicado en uno de los principales diarios de circulación nacional, ante observaciones críticas provenientes –entre otros– de sectores también de oposición, tendentes a equiparar con posiciones igualmente extremas en sectores gubernamentales, la intervención de una alta jerarquía de la Iglesia católica, contentiva de fuertes censuras al Gobierno de Chávez, afirmaba: “...Han sido también vergonzosos los intentos de ciertos editorialistas, en éste y otros diarios, dirigidos a establecer una presunta equivalencia moral entre el gobierno y el Cardenal como ‘extremistas’ igualmente condenables. *No hay equivalencia moral posible entre el mal y el bien, y el bien no es ‘extremista’*”. Véase Romero (2006). El destacado es nuestro.

<sup>10</sup> Sobre las razones para acatar los resultados de un acuerdo político, Przeworski nos señala: “...Algunas instituciones ofrecen a las fuerzas políticas significativas, bajo determinadas condiciones, la perspectiva de que en algún momento posterior tendrán oportunidad de promover sus intereses, perspectiva que es suficiente para inducirlos a acatar los resultados desfavorables en el futuro inmediato. Las fuerzas políticas aceptan las derrotas presentes porque están convencidas de que el marco institucional que organiza la competencia democrática les permitirá avanzar en la consecución de sus intereses en el futuro” (Przeworski, 1995:30). Véase, también, el trabajo citado ya sobre las implicaciones del conflicto en la configuración política de una sociedad, en Hirschman (1996).

por los bandos enfrentados, las cuales incluyen desde las formas más directas, como el despido o pérdida del empleo, o la imposibilidad de obtener contratos para el sector corporativo, la restricción de un derecho, o la limitación al acceso a un bien o servicio público o privado, la agresión o violencia directa, hasta diversas formas de presión y censura sociales (incluyendo la expulsión) de grupos y colectivos de los que los individuos “disidentes” forman parte normalmente.<sup>11</sup>

Situaciones muy extremas de polarización política podrían adquirir una dimensión regional (véase Dahl, 1971; Lipjhart, 1989, 2000), en la cual ciertos grupos promueven la autonomía o secesión de una región con respecto al resto de la nación. En Venezuela, muy recientemente apareció un grupo que reclama la autonomía, en opinión de otros la “secesión”, de la principal región de producción de petróleo del país. Si bien podría existir algún antecedente histórico de pretensiones autonomistas, basados incluso en ciertos rasgos de una subcultura regional, estos reclamos aparecen repentinamente, y resultan ahora totalmente nuevos, relacionados con la campaña electoral y no exentos de injerencia externa, lo cual parece confirmarse –al menos hasta ahora– por la indiferencia, cuando no rechazo, de las principales fuerzas políticas de la nación, sectores organizados de la sociedad y, en general, de la población, incluso de la región en cuestión,<sup>12</sup> lo cual no deja de ser un indicador de la gravedad de las dimensiones que la polarización ha adquirido en el debate político venezolano.<sup>13</sup>

b) Desinstitucionalización del debate: el tópico anterior nos permite describir precisamente un nuevo rasgo del debate político actual en Venezuela. Es el hecho de que el ámbito en que ocurre el debate político se restringe, en parte debido a la polarización, en parte debido a la crisis de las instituciones tradicionales de representación y agregación de intereses sociales (los partidos políticos,<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Un importante asesor presidencial en materia de defensa y relaciones exteriores, el general Alberto Müller Rojas, nos ilustra con sus opiniones la tolerancia actual a algunas de estas conductas, al responder a acusaciones al gobierno sobre este tema: “... En qué parte del mundo usted aspira, que siendo contestatario, le den trabajo o contratos en el sistema político. En EE UU los comunistas cuando McCarthy no tenían el derecho ni a ser ciudadanos y eso es entendible”. Entrevista en el semanario *Quinto Día*, Caracas, del 24 de febrero al 3 de marzo de 2006, pp. 24-25. Sus palabras revelarían que este rasgo subsiste al interior del debate y sistema político venezolano.

<sup>12</sup> A pesar de la localización de sectores de la oposición, principalmente en ciertas áreas o regiones del país, no existe aún, en nuestra opinión, una base regional de las diferencias políticas en Venezuela, lo cual, de existir, contribuiría a potenciar los niveles de conflicto general en el país.

<sup>13</sup> Un reportaje extenso sobre las pretensiones de este grupo político apareció en el diario *El Nacional*, Caracas, 05 de marzo de 2006, pp. D-1, 2; véanse, también, ediciones siguientes.

<sup>14</sup> Una caracterización del sistema de partidos políticos venezolano en la actualidad puede leerse en Molina Vega y Álvarez Díaz; véase, especialmente, el capítulo 1. Una síntesis de esta situación, de acuerdo con

gremios, sindicatos, el Congreso Nacional), y ocurre principalmente fuera de las instituciones consagradas normalmente en los estados democráticos para darlo. Se da en la calle, invocando insistentemente al “pueblo”, en el marco de marchas y concentraciones y, fundamentalmente, a través de los medios de comunicación, propiedad de empresas o del sector público, utilizando representantes “mediáticos” con influencia evidente en la formación de la opinión pública, que actúan no como “medios” sino como “partidos”, promotores interesados de tópicos o asuntos del debate público.<sup>15</sup> El debate adquiere unas “caras”, no ya de políticos (o no sólo de ellos), sino que pasa a constituir un atributo personal, y ahora principalmente, de individuos con capacidad de usar efectivamente los medios de comunicación. El debate político se da fundamentalmente en, a través y por los medios de comunicación de masas. Un rasgo que este hecho contribuye a ocultar, al tiempo que paradójicamente acentúa, es la “corporeización” del debate, es decir, el contenido del debate político expresa naturalmente los intereses de los grupos, o asociaciones al interior de la sociedad, que monopolizan estos medios, sólo que aparecen transfigurados en la “opinión” de un actor social, no ya exclusivamente político, un “comunicador” pretendidamente objetivo, pues carece inicialmente de “interés” u “opinión propia”, cuya “popularidad” se utiliza para legitimar unas opiniones en particular y promover socialmente ciertos fines. Aunque en apariencia el ámbito del debate se amplía, en la práctica se restringe, pues ocurre en contextos localizados (principalmente medios con intereses limitados), con exclusión de opiniones o intereses contrarios al que se pretende promover; se da, por tanto, entre un número reducido de agentes interesados, cuya participación se restringe en lo fundamental a exponer un “guión”,<sup>16</sup> a “construir” argumentos y a generar “opinión pública”, en un tiempo limitado, sobre un tópico especial,

---

este texto, sería: “...El sistema de partidos aparece hoy integrado por un conjunto de organizaciones políticas caracterizadas por la poca profundidad de su compenetración social, escasa identificación partidista, alta volatilidad electoral, baja legitimidad, y débil organización signada usualmente por el liderazgo personalizado y no el colectivo... que permiten como veremos considerarlo como un *sistema des-institucionalizado*” (2004:10).

<sup>15</sup> Precisamente, uno de los periodistas involucrados en este debate, quien además contaba con una gran proyección en la opinión pública y los medios, reconocía, en momentos de gran agitación e inestabilidad política, en relación con los excesos de la prensa: “Siempre ha habido *excesos*, porque siempre ha habido un grupo de periodistas –así como también de médicos o ingenieros– *excesivamente* politizados. *Eso es muy humano y sucede en todas partes del mundo* [?]” (Véase entrevista a Napoleón Bravo en *El Nacional*, 17/01/2002, p. B-última. El destacado es nuestro).

<sup>16</sup> Los personajes y opiniones difundidas por los medios no son representativas de la diversidad de opiniones existentes en la sociedad, se limitan generalmente a divulgar una opinión interesada, conocida con anticipación por quienes administran el espacio o el medio, quienes están interesados en divulgar estos mensajes, para lo que se escogen individuos que representen mejor estas opiniones y divulguen mejor el mensaje de interés.

sometido a las restricciones del medio,<sup>17</sup> que también son las del dueño de éste, ya sea una empresa, o el Estado o gobierno.

Se presiona por un acuerdo en el cual no está previsto que el colectivo participe, o lo haga sólo de forma bastante relativa, indirecta o “pasiva”, para el que además está poco preparado<sup>18</sup> –pues se encuentra desorganizado, desorientado y con poca conciencia de sus intereses–, a fin de asegurar resultados efectivos a su favor en el debate político. El debate político se concentra en los medios y, particularmente, entre representantes del medio, los inicialmente visibles: cómicos, periodistas, personalidades del *show business*, tales como artistas, cantantes, etc. Y los menos visibles, pero más determinantes, los propietarios de medios y el gobierno.

c) Degradación del debate político: se subvalúan las capacidades analíticas, se recurre a los calificativos, a las etiquetas, muchas de ellas insultantes, y a las consignas para suplir las deficiencias de conocimiento y análisis. Se acude a ellas para clasificar a los aliados y adversarios, así como a los cursos de acción que resultan legítimos al interior de esquemas ideológicos manejados prejuiciadamente. Las acciones y argumentos del competidor político son ubicados a priori en un marco o esquema de lucha política ideológica, que les presenta en el extremo entre izquierda y derecha, sin que esto tenga necesariamente una contrapartida sociológica, ideológica o política real y sea, por el contrario, generalmente falso, insuficiente y definitivamente sesgado.

El debate político se expresa, fundamentalmente, en términos de opiniones y frases vacías de contenido empírico o fáctico, especies de “eslóganes”. Se discute menos sobre hechos y no sobre frases, abunda la retórica, la manipulación y el

---

<sup>17</sup> En uno de sus trabajos, Th. Lowi refiere los comentarios de un periodista de televisión, Sander Vanocur, en relación con la campaña presidencial estadounidense de 1976: “... En mi opinión la televisión no está hecha para soportar esta carga. El proceso político es demasiado complicado... para un medio que está ideado, tal vez inadvertidamente, para introducir breves mensajes en el mensaje de la televisión”. Y más adelante se acota más enfáticamente, “...Sería una locura que trataran de explorar cuestiones en un medio que mide el mundo en 30 segundos...”. Citado en Lowi (1993:144).

<sup>18</sup> Con esta posición no pretendemos dar pie a ninguna predisposición exclusivista que extrañe lo político de las mayorías; sino afirmar, por el contrario, el reconocimiento de lo específico de la política, de la existencia de ciertas reglas o normas a las que se debe conformar el comportamiento político en la democracia para asegurar su vigencia y efectividad, y la necesidad de instruir a la sociedad en el conocimiento de un área tan especializada como cualquiera otra, así como reconocer el hecho de que la política incluye necesariamente –aunque no exclusivamente– la representación, a pesar de la existencia de momentos de actuación directa de los colectivos.

juego de palabras. Se hace un uso amplio de la retórica y la propaganda. Se recurre más o menos frecuentemente a la ofensa y la descalificación como mecanismos fáciles para forzar la identificación y provocar la adopción de un partido por los ciudadanos.

d) Irracionalidad: contaminación del debate con recursos a la emotividad, a elementos del espectáculo y a la exaltación de una ideología, ésta en términos no de un sistema de ideas, sino de falsa conciencia, para promover actitudes inconscientes que invocan los sentimientos y la afectividad. Existe poca disposición a evaluar la evidencia, reflexionar sobre los argumentos del otro, exponerse a ideas o creencias contrarias a las propias. Se promueve el enfrentamiento, la confrontación en lugar del diálogo y el compromiso, constituyéndose un juego peligroso que promueve tensión y violencia que, aunque se espera mantenerla contenida, nadie puede asegurar su contención permanentemente. Este rasgo comprende, igualmente, la “politización” excesiva de la población y prácticamente de todos los sectores y ámbitos de la actividad nacional.<sup>19</sup> Se promueve un sentimiento general de división y sectarismo, destaca particularmente la promoción de actitudes dogmáticas o “ideologizadas” en la juventud.<sup>20</sup> El juego adquiere no pocas veces, producto de la manipulación de algunos factores, la forma al menos aparente de un juego “suma cero”, o de un enfrentamiento existencial entre los bandos identificados, quienes persiguen maximizar sus ganancias en el presente y que motiva el uso de estrategias radicales por quienes son (o se sienten) excluidos de los beneficios del juego, especialmente si los beneficios son grandes (ver Lijphart, 1989; Przeworski, 1995). Además, el uso masivo de estrategias modernas de campaña y propaganda política, a través de los medios de comunicación de masas, remarca estos rasgos y los hace más efectivos, limitando el recurso a la

<sup>19</sup> Compárese “Política de Weltanschauung”, “...los partidos caracterizados por esas ideologías totales han intentado a menudo crear lo que Sigmund Neumann ha llamado un ‘entorno integrado’, en el que el máximo posible de vida de los miembros está encapsulado en actividades ideológicamente vinculadas. Estas acciones se basan en el supuesto de que es importante aislar a los fieles del contacto con la ‘falsedad’ expresada por los no creyentes...” (Lipset, 1959:138).

<sup>20</sup> “...Mira entonces, vienen los movimientos sociales: clase media en positivo, la Unión Nacional de Trabajadores, la Federación Bolivariana de Estudiantes. Tenemos que seguir fortaleciendo esos movimientos sociales.

“Como parte de la nueva etapa, para incrementar nuestra capacidad, debemos organizar los estudiantes de la Misión Sucre, una federación de estudiantes, son cientos de miles, y organizar a los estudiantes de la Misión Ribas, una federación de estudiantes de la Misión Ribas, y la Misión Robinson. A todo eso hay que darle forma organizativa. *No puede ser que sólo nos limitemos al aula de clase y a ver videos.* Hay que trascender hacia la organización popular, hacia la organización social” (Hugo Chávez en Taller de Alto Nivel, “Nuevo Mapa Estratégico”, Caracas, 12-13 de noviembre de 2004, p. 29. Documento accesible en la web: [http://www.emancipacion.org/descargas/El\\_nuevo\\_mapa\\_estrategico.pdf](http://www.emancipacion.org/descargas/El_nuevo_mapa_estrategico.pdf). El destacado es nuestro).

racionalidad de los individuos y acentuando los elementos inconcientes o irracionales, cuya gravedad se ahonda por la invocación a la violencia.

Otro rasgo de esta irracionalidad implica la subestimación de las restricciones que las “reglas” institucionales y las condiciones estratégicas del “juego” o la coyuntura imponen, destacando la presión permanente sobre las instituciones y la desatención de cualesquiera otras restricciones a la “voluntad política”. Se alardea de las estrategias radicales o extremistas y se exagera la conflictividad y confrontación entre los individuos. Se desestiman las que pudieran ser reglas de la economía o del mercado y la naturaleza limitada de los recursos de un país, las formas del debate político en democracia, y de la diplomacia y la moderación en las relaciones internacionales. El estado de derecho es sometido a prueba cotidianamente y colocado en una situación de permanente tensión por funcionarios, grupos políticos de oposición y otros actores sociales.

No se plantean problemas de elección al interior de los actores políticos, se exige una coherencia u homogeneidad internas consistentes, al igual que una solidaridad plena de los simpatizantes con respecto a las decisiones adoptadas por sus dirigentes o representantes, por lo que los individuos suprimen sus dudas o diferencias con las decisiones de sus dirigentes políticos, ocultando sus verdaderas preferencias. Las decisiones de los dirigentes, al menos desde que son adoptadas, quedan envueltas en un velo sagrado de infalibilidad, se proscriben cualquier crítica, por lo que las decisiones y acciones de los principales actores políticos –del gobierno o la oposición– se presentan automáticamente a la opinión pública como consistentes con intereses colectivos o nacionales, ausentes de contradicciones internas, bondadosas en sí mismas, que sólo por temeridad o mala fe pueden ponerse en duda.

Esta situación representa el idílico paraíso de la política sin costos, ni contradicciones, esto es, de la no política. Constituiría de hecho el adelanto de la sociedad sin política. Y lo que es aún más negativo, la suposición de que la política no tiene costos y que todos deben apreciar los beneficios de una política que “sólo tiene aspectos positivos”, se convierte –incluso involuntariamente– en una situación en la que no es aceptable ninguna oposición a estas políticas, punto de partida de actitudes dogmáticas e intolerantes.

Tales características determinan los resultados de un juego político proclive a generar niveles subóptimos de bienestar social y a mantener, permanentemente,

a sus integrantes en un estado de tensión, inestabilidad y precariedad personal e institucional.

e) Desestimación del “saber” y la “experiencia” políticas: se refiere al predominio de una actitud que subestima las complejidades de la política, tanto del “contenido” como del “proceso”, a través del cual se alcanza determinada decisión colectiva y se convierte ésta en política. Está relacionada con cierta actitud ingenua hacia la política y en particular hacia la democracia, actitud en la que pueden estar presentes estrategias de manipulación política y demagogia, pero en la que también impera cierta ignorancia sobre la naturaleza de la política,<sup>21</sup> la cual se visualiza solamente como una confrontación de “valores” en la que éstos deben imponerse por el contenido de “bondad” que se les atribuye anticipadamente.<sup>22</sup> La política se reduce a un conflicto maniqueo entre el bien y el mal, que simplifica la realidad hasta hacerla irreconocible y anula cualquier base efectiva para la acción política. Esta actitud implica, además, una gran desconfianza hacia los políticos y las organizaciones que persiguen intereses políticos, especialmente los partidos políticos. No debe dar pie esta observación a la exclusión de la labor política de ningún miembro de la sociedad, sino al reconocimiento de las dificultades de ésta, a la educación y la formación de los ciudadanos para el mejor ejercicio de la política, la cual, especialmente en democracia, requiere del desarrollo de ciertas actitudes personales y sociales, tales como la propensión al diálogo, la tolerancia de las diferencias y la disposición al compromiso, entre otras.

<sup>21</sup> El trabajo de Canache (2002) presenta información que identifica a la población joven y políticamente menos sofisticada como presente significativamente entre las bases de apoyo político de Chávez, pero creemos ver, al menos en el marco de la polarización de los últimos años, que estos rasgos están igualmente presentes entre sus adversarios. En contraste, una comparación de registros de opinión pública correspondientes a los años 1973 y 1993, observaba: “...comprobamos que las personas con niveles de educación superiores eran considerablemente más activas en la discusión política que las menos educadas, podríamos inferir que hay una relación positiva entre la continuidad del sistema democrático y la expansión de la educación en Venezuela, por una parte, y el desarrollo de pautas de participación política más intensa, por la otra. También observamos una fuerte relación entre el nivel de movilización cognitiva y la participación [política] no convencional, dirigida por una élite...” (Welsch y Carrasquero, 1996:55).

<sup>22</sup> Esta percepción de la política coincide con el modelo “ochocentista” o racional de la política, “el postulado central de la teoría democrática del siglo XVIII”. Según Przeworski, “los conflictos se reducirían a desacuerdos en cuanto a la identificación del bien común y podrían superarse a través del debate racional: el proceso político sólo cumpliría un papel epistemológico, como búsqueda de la auténtica voluntad general” (1995:24). Y citando a Coleman, de acuerdo con este modelo de la política, ‘la minoría no está formada por los perdedores y la mayoría por los ganadores, sino que los integrantes de la minoría tienen ideas falsas sobre la voluntad general, mientras las de los integrantes de la mayoría son verdaderas’ (citado en Przeworski, 1991:24-5) “...Piensan que la lucha política o religiosa es un enfrentamiento entre la verdad divina o histórica por una parte y el error básico por la otra” (Lipset, 1959:138).

f) Oportunismo: la centralización del poder político, la disposición a hacer uso de él sin restricciones y la disponibilidad de gran cantidad de recursos públicos provenientes del petróleo estimulan la adopción de una conducta oportunista (o rentista) por parte de ciertos individuos, quienes forman un “ejército” creciente de funcionarios y dependientes del Estado, lo cual incluye a representantes del sector privado que negocian con éste, en condiciones distintas a las competitivas. El Estado es el mecanismo predominante de distribución de recursos en la sociedad, lo que genera suficientes incentivos para que algunos individuos orienten su conducta a halagar la acción de funcionarios públicos con el objetivo de obtener “prebendas” y demás beneficios del Estado.

En situaciones en que la política adopta la forma de un juego de “suma cero”, en el que además las ganancias (o pérdidas) del juego pueden ser cuantiosas, existen incentivos para que se formen coaliciones mínimas ganadoras, esto es, para que se excluyan otros potenciales miembros de esta coalición, así como para que los individuos extremen sus estrategias para conformar tales coaliciones (Przeworski, 1995; Lijphart, 1989; Lipset y Rokkan, s.f.). Esta situación implica la adopción de conductas cínicas por parte de los individuos, quienes además ocultan sus verdaderas preferencias u opiniones con el fin de no afectar sus posibilidades de obtener ventajas de la relación con el gobierno.<sup>23</sup>

Una contrapartida de esta actitud del lado de las estrategias “antisistema” podría constituir la adoptada por sectores de oposición en su tendencia al “aventurerismo político”, a “echar una parada” o “probar suerte”, implantando planes realmente irresponsables que ponen en peligro la precaria institucionalidad democrática del país y promueven acciones autoritarias, con el incentivo latente –entre otros– de tener acceso privilegiado a los recursos públicos y otras ventajas gubernamentales, aun al riesgo de acabar con cualquier vestigio de democracia.<sup>24</sup>

El gobierno obvia la existencia de restricciones en su desempeño, sobrestimando las ventajas de corto plazo, y la oposición toma acciones temerarias que

---

<sup>23</sup> Son comunes las críticas hacia la proliferación de este tipo de conducta en gobiernos de la ex URSS y las naciones bajo su influencia. Pueden leerse en Gorbachov (1987) y la compilación de Duch y Tello (1991). En este último libro se puede leer, por ejemplo, “...con la peculiaridad de que el sistema estimulaba y recompensaba a los más acomodaticios y faltos de escrúpulos. Estos últimos hacían carrera y pasaban a formar parte del aparato de poder...” (1991:42).

<sup>24</sup> En nuestra opinión, este comportamiento quedó en evidencia durante el intento de golpe de abril de 2002, el cual fue monopolizado por sectores empresariales, y durante el paro económico de finales del mismo año, con el cual muchos ejecutivos de la empresa estatal petrolera y un sector de los empresarios pretendieron constituirse en los “grandes electores”, forzar un trato especial e imponer un presidente.

amenazan la vigencia de la democracia y la estabilidad política y económica nacional, para sacar provecho en la coyuntura. Todo esto contribuye a incrementar la sensación de riesgo, inestabilidad e incertidumbre de los individuos, anulando la eficacia institucional y exacerbando el impacto de los factores generadores de conflicto.<sup>25</sup>

g) Apelación a la Fuerza Armada: el actual marco institucional otorga mayor presencia y relevancia a la Fuerza Armada Nacional (el artículo 328 de la Constitución de 1999 le encomienda, entre otras atribuciones, “la participación activa en el desarrollo nacional”) en la formación de la “política”; este rasgo no sólo comprende el diseño institucional formal, sino que también destaca la práctica de apelar o convocar a la Fuerza Armada a intervenir en la vida política venezolana, presente actualmente en ambos actores principales del debate político nacional, la oposición<sup>26</sup> y el gobierno,<sup>27</sup> lo que contribuye a colocar, inapropiadamente, a esta institución y sus mandos, en un lugar excesivamente destacado del debate político (véase, entre otros, los trabajos de Agüero, y Burggraff y Millet en Goodman *et al.*, 1995; Norden, en Ellner y Hellinger, 2003; y Sucre Heredia, 2004). Es evidente la mayor importancia que han asumido sectores al interior de la Fuerza Armada en posiciones visibles de la dirección de la gestión pública; es notable la presencia de numerosos integrantes de la institución quienes ocupan puestos directivos en oficinas o entes públicos gubernamentales, gerenciando programas y entes oficiales, relacionados con el ámbito civil.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Existen elementos del razonamiento formal que permiten anticipar esta conducta de los individuos que forman parte de la minoría, en sociedades en las que las divisiones sociales son muy marcadas. En éstas, las decisiones políticas implican generalmente altos costos, por lo tanto, la adopción de formas políticas o mecanismos institucionales que excluyen al adversario de las ganancias del juego, promueven la adopción por estos últimos de estrategias más arriesgadas, las cuales generan tensión e inestabilidad en el sistema global (véase Lijphart, 1989; Przeworski, 1995).

<sup>26</sup> Tres meses antes del golpe de abril de 2002 el Alcalde Metropolitano, máxima autoridad del gobierno de la ciudad capital y miembro de la oposición, aunque originalmente electo en la plataforma del gobierno nacional, hacía una convocatoria pública a la que denominaba “Fuerza Armada institucionalista”, a la que “no venera a Fidel Castro ni a Gaddafi (*sic*)”, para que “defienda la libertad de expresión [?] y los derechos humanos”, en *El Nacional*, Caracas, 09 de enero de 2002, p. D-1. “... A estos militares les digo, queridos compatriotas, no permitan que este hombre [el presidente Chávez] provoque un baño de sangre y nos conduzca a una guerra civil...”, p. D-2.

<sup>27</sup> El gobierno hace alarde público del respaldo de la Fuerza Armada y la convoca a una lucha en la que éste es el representante de las mayorías nacionales frente a agentes al servicio de poderes extranjeros, convocándoles a participar de esta lucha en defensa de la soberanía nacional y de la revolución. En la conmemoración de los primeros siete (7) años de gobierno, las noticias oficiales afirmaban: “Pasados siete años de Gobierno Revolucionario, el pueblo y los militares se han unido para nunca jamás volver a estar separados. La Fuerza Armada se ha convertido en fiel compañero de la lucha de todos los ciudadanos de la República Bolivariana”, ver <http://www.rnv.gov.ve/noticias/index.php?act=ST&f=2&t=29418>.

<sup>28</sup> Para mayores especificaciones y acerca de las implicaciones de este fenómeno sobre la inestabilidad del sistema político, puede verse el trabajo de Norden en Ellner y Hellinger (2003).

Un rasgo relevante del diseño institucional, asociado con la Fuerza Armada Nacional, es el mayor control presidencial sobre la designación de los mandos de la Fuerza Armada, lo cual puede servir, además, como mecanismo para asegurar su aquiescencia y respaldo al gobierno y al Presidente de la República.<sup>29</sup> Sin embargo, la importancia que adquiere la Fuerza Armada en el diseño institucional y en la práctica de los representantes del debate político nacional, puede, especialmente en ocasiones de crisis aguda o muy conflictivas, promover –más de lo necesario o conveniente– la intervención de la Fuerza Armada en el debate político, constituyendo (al menos en potencia) una restricción a la competencia abierta y legítima propia de la democracia.

La posición de primer plano de la Fuerza Armada debilita e inhibe contenidos civiles de la institucionalidad y podría amenazar su estabilidad, no necesariamente en la actualidad, sino en cualquier momento difícil a futuro, especialmente ante debilidades de los liderazgos y las instituciones del gobierno civil. Este peligro, que no ha estado ausente en el pasado institucional venezolano, fue evidente durante la crisis de abril de 2002. El riesgo de ello se agrava debido al grado de división política que existe y la tendencia a apelar a la Fuerza Armada por parte de los actores políticos principales.<sup>30</sup> De hecho, los estudios acerca de la transición democrática<sup>31</sup> revelan que “...dondequiera que las fuerzas armadas han mantenido su autonomía del control civil, el problema militar constituye una fuente

---

<sup>29</sup> En la Constitución nacional se refuerzan las atribuciones presidenciales para el control institucional de la Fuerza Armada, al otorgarle además la atribución –anteriormente en manos del Parlamento– de promover el ascenso de oficiales a partir del grado de Coronel y Capitán de Navío (Artículo 236, numeral 6. Constitución, 1999). Este control se favorece por el fuerte liderazgo personal del presidente Chávez y el apoyo que ha concitado, pero se desconoce la viabilidad del mismo en condiciones menos favorables y con un liderazgo personal menos marcado. Los rasgos que señalamos están presentes también en la versión de la nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (*Gaceta Oficial* N° 38.280, 26/09/2005), en la cual se promueven la Doctrina de la Consolidación del Poder Militar, el fortalecimiento de la integración cívico-militar y la movilización popular a favor de la “defensa integral de la nación”, y se refuerza el mando militar del Presidente de la República o Comandante en Jefe de la Fuerza Armada. Destaca en este instrumento la conformación de la Reserva Nacional y la Guardia Territorial, en particular, esta última constituida por los “ciudadanos y ciudadanas que voluntariamente se organicen para cumplir funciones de resistencia local ante cualquier agresión interna o invasión de fuerzas extranjeras”. Por último, contempla la posibilidad de dictar cursos premilitares y militares en la red educativa nacional, y crearía, por tanto, un subsistema educativo militar paralelo dependiente principalmente del Ministro de la Defensa. Ver texto de la ley, en <http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=497>

<sup>30</sup> La nueva doctrina militar, definida por el gobierno, no deja de implicar algunos riesgos de militarización de la vida civil: “Esta doctrina militar incluye la cooperación activa del pueblo en defensa de la soberanía. Dicha doctrina tiene tres líneas: 1) Fortalecimiento del poder militar de la Nación, 2) Profundización de la unión cívico-militar (soldados y pueblo) y 3) Fortalecimiento y participación popular en las tareas de la defensa nacional”. Véase: [http://www.abn.info.ve/go\\_news5.php?articulo=35769&lee=4](http://www.abn.info.ve/go_news5.php?articulo=35769&lee=4)

<sup>31</sup> Véase, por ejemplo, el trabajo de A. Rouquié, en O’Donnell y Schmitter (1994, vol. 3, pp. 171-211).

permanente de inestabilidad para las instituciones democráticas” (Przeworski, 1995:162).

h) Excesiva concentración en la figura del Presidente:<sup>32</sup> la figura del presidente Hugo Chávez tiene en el actual debate político una importancia excesiva.<sup>33</sup> Es el objeto mismo del debate, el cual se concentra tanto en la forma, es decir, en su comportamiento desaprensivo, poco atento a las maneras, normas y convenciones propias de la política y la investidura que ocupa, como en el fondo de los asuntos de políticas que promueve y publicita directamente. Destaca particularmente el hecho que sus iniciativas comprenden casi cualquier ámbito de la actuación humana y mundial, extendiéndose tanto que casi anula las posibilidades que surjan iniciativas independientes de sí mismo. Si bien esta situación podría facilitar la relación con un sector tradicionalmente poco motivado a participar en política, la concentración excesiva del debate en la figura del Presidente acarrea algunas consecuencias institucionales negativas que es necesario atender;<sup>34</sup> entre otras, destaca la prolongación de un Estado de escasa institucionalización de la política, excesiva concentración y personalización del poder, debilidad de los liderazgos alternos y de las autoridades regionales. Estas consecuencias son

<sup>32</sup> Las encuestas de opinión registran como división más significativa entre los grupos consultados, aquella que los ubica entre chavistas y no chavistas; sin embargo, un número creciente de venezolanos comienzan a rechazar esta ubicación: “...En marzo de 2005, según una encuesta de Hinterlaces, de alcance nacional, el 51% de los consultados no se consideraba ni chavista ni antichavista... El promedio de este sector, en los 20 meses anteriores, era de 47%. No obstante, es el eje chavismo-antichavismo el que marca la mayor parte de la agenda política del país, arrastrando al sector «Ni-Ni», que se ve obligado a optar por algún bando en diversas circunstancias...”. Nota 7 del informe de Provea, accesible en [http://www.derechos.org/ve/publicaciones/infannual/2004\\_05/Contexto.pdf](http://www.derechos.org/ve/publicaciones/infannual/2004_05/Contexto.pdf)

<sup>33</sup> En un reportaje sobre la edición de un calendario escolar por las autoridades del área, un representante de la oposición política al gobierno observa críticamente: “...en la más pequeña celebración aparece el nombre de Hugo Chávez... y en general cualquier iniciativa del Gobierno o cualquier acto institucional del Estado no lo son de ellos, sino de Hugo Chávez Frías en carne y hueso...” (Caballero, 2006). Por otra parte, Roland Denis, ex viceministro de Planificación reconoce: “Chávez se convierte en un poder en sí mismo desde el cual salen todas las propuestas, giran todas las negociaciones y se ubican todas las demandas. Incluso, la protesta, ya no sólo de la reacción sino de los sectores populares, tienen un sitio último de llegada que es él, e igual, todas las culpas empiezan desde este lado a tocarlo aunque su inocencia sigue siendo la matriz con que se mueve la mayoría que lo apoyamos. La fortaleza primera se convierte ahora en debilidad del proceso [...]. Su liderazgo se convierte entonces en un liderazgo obligado a encerrarse en lo mediático (salvo los mítines, mucho más escasos después del referéndum), y su condición de dirigente, en dirigente absoluto, sin diálogo real, sin lugar de referencia y debate colectivo, sin información y opinión que lo interpele. Dirigente incuestionable y solitario, rodeado por la sumisión...”, cita en [http://www.derechos.org/ve/publicaciones/infannual/2004\\_05/Contexto.pdf](http://www.derechos.org/ve/publicaciones/infannual/2004_05/Contexto.pdf)

<sup>34</sup> Sistemas políticos excesivamente personalizados revelan debilidad de sus instituciones, ya que las críticas a los liderazgos políticos se asocian con críticas a todo el sistema político. Véase Lipset y Rokkan (s.f.).

visibles en la crisis de los partidos políticos,<sup>35</sup> particularmente aquellos quienes forman la alianza en el gobierno, aunque pudiera comprender también a aquellos que conforman la oposición, los cuales están lejos de constituir organizaciones autónomas e independientes que fijen soberanamente su agenda de políticas y designen sus candidatos. En el caso de los partidos que integran la alianza gubernamental, estas opciones lucen ampliamente dependientes de las decisiones del Presidente, quien incluso designa (al menos, veta o avala en última instancia) personalmente los candidatos a ser promovidos en los procesos electorales. Los candidatos restringen, en la inmensa mayoría de los casos, la labor de promoción de su candidatura a difundir un afiche o retrato junto al Presidente, o aparecer con él en los medios y eventos públicos. La relación de representación con el elector y la dignidad del órgano a elegir pasan a depender de una relación directa o interpuesta con el primer mandatario; anula igualmente la posibilidad de ejercer control popular sobre los designados, mientras éstos cuenten con el respaldo del Presidente. Por otra parte, el contenido y la forma de actuación de estos órganos se limitan a concretar la voluntad del Presidente. Las instituciones adquieren de esta manera, cada vez en mayor medida, la forma que se ajusta a los deseos de éste, restándoles flexibilidad y posibilidad de permanencia.<sup>36</sup>

i) Intervención de factores internacionales: la dinámica del debate político nacional ha sido acompañada —no siempre con intenciones de agudizarlo— por factores del poder internacional. La importancia de Venezuela en la región y la índole estratégica de los recursos naturales que se encuentran en su suelo han motivado, en reiteradas ocasiones, la intervención de factores estratégicos del resto del mundo, lo cual si bien no siempre ha sido negativo (por ejemplo, las misiones de distensión de organismos internacionales y las visitas de grupos internacionales de observadores electorales), coloca no pocas veces la solución del debate político nacional fuera de nuestras fronteras. Ello implica la renuncia a porciones de la soberanía del Estado, el reconocimiento de cierto grado de ingobernabilidad política y, en muchos casos, exacerba los conflictos internos, agregando a la pugna nacional intereses foráneos. Por último, esta intervención

<sup>35</sup> Una evaluación integral de la situación actual de los partidos políticos venezolanos y los posibles efectos de la desinstitucionalización del sistema de partidos políticos venezolano puede encontrarse en Molina Vega y Álvarez Díaz (2004).

<sup>36</sup> La popularidad personal no es transferible, lo que la convierte en un débil criterio de validez y soporte institucionales. Compárese este rasgo, que queremos destacar para Venezuela, y las consecuencias negativas asociadas con la excesiva concentración de la política en la figura presidencial, con el sistema tratado por Lowi (1993) como “presidencia plebiscitaria”, particularmente sus fallas y consecuencias sobre la ausencia de un sistema de responsabilidad colectiva. Véanse especialmente pp. 125ss.

no siempre ha sido solicitada, ni tampoco han sido públicas todas sus intenciones y medios de intervención (por ejemplo, ha sido denunciada y quedado en evidencia la participación de funcionarios no autorizados de gobiernos extranjeros en operaciones secretas en el territorio nacional, otros intentos manifiestos de intervención en la política nacional por factores foráneos, incluso el reconocimiento inicial del gobierno de facto por representantes de gobiernos extranjeros<sup>37</sup>). La intervención de factores internacionales no se limita, sin embargo, a respaldar a la oposición política, sino que es visible también en la presencia significativa que han alcanzado, asesores y proveedores de ayuda internacional al gobierno, provenientes de gobiernos extranjeros aliados. Especialmente, es el caso del gobierno de Cuba, lo cual por su extensión y connotaciones ideológicas generan resistencias y pudieran convertirse en fuente de conflicto.

## 2. IMPLICACIONES INSTITUCIONALES DEL DEBATE POLÍTICO CORRIENTE EN VENEZUELA

En la descripción hecha del debate político actual en Venezuela destacan los aspectos conflictivos o confrontacionales, que amenazan, en nuestra opinión, la estabilidad social y política en el presente, por lo que consideramos necesario hacer un esfuerzo por introducir aspectos consensuales y alcanzar pactos políticos esenciales<sup>38</sup> entre los factores que intervienen en él, con el propósito de obtener ganancias en estabilidad política, condición necesaria para alcanzar cotas más elevadas de progreso social.

Resulta inconcebible hoy día un régimen democrático sin la existencia de la(s) izquierda(s), pero eso exige también de ella(s) responsabilidades: "...(e)n las nuevas condiciones de la democracia la izquierda debe propugnar por una política tolerante que establezca la premisa de que el enemigo es sólo un adversario

<sup>37</sup> El Fiscal General de la República, en su libro, *Abril comienza en octubre*, da algunos detalles de la intervención del Gobierno norteamericano en los sucesos que rodearon el golpe de abril de 2002. Véase Rodríguez (2005:167ss.).

<sup>38</sup> "Un pacto consiste esencialmente en un compromiso negociado por el cual los actores concuerdan en renunciar (o recurrir en menor medida) a su capacidad de perjudicarse mutuamente, garantizando que no pondrán en peligro las respectivas autonomías corporativas o intereses vitales de cada cual. Lo característico es que esto implique ciertas cláusulas en las que se estipula que no se recurrirá a la violencia, se prohíbe apelar a otras fuerzas sociales (militares o las masas) y a menudo se establece el compromiso de volver a recurrir a un pacto como medio de resolver las disputas futuras..." (O'Donnell y Schmitter, 1994, vol. 4:64-5).

contingente; debe reconocer en el otro, en el diverso, no más un enemigo a destruir sino un adversario al que se le debe reconocer la posesión de una porción de verdad reduciéndolo (*sic*, ¿reduciendo?) al mínimo las condiciones del desencuentro...” (Cisneros Ramírez, 1996:90). Por otra parte, esta condición obliga a otro tanto, por parte de representantes del pensamiento político más conservador. En general, diría que no es posible conciliar las posiciones democráticas con una actitud recalcitrante y negadora de la existencia del adversario. La vigencia de la democracia requiere de la existencia de pluralismo;<sup>39</sup> es necesaria la existencia de opciones y la posibilidad de alternancia en el poder. Esto plantea la necesidad, a su vez, de reconocer la inevitabilidad, al menos en cierto grado, de conflicto (ver Przeworski, 1998). Fue quizás la supresión de cualquier forma de conflicto abierto o legítimo una de las razones por las que colapsó el modelo de los “socialismos realmente existentes”. Por lo tanto, es conveniente introducir la noción de “conflicto” como uno de los componentes necesarios de la democracia, adoptar comportamientos y diseñar instituciones que promuevan el tratamiento adecuado de éste, es decir, evitar que alcance un grado tal que desborde los límites de un orden social mínimo en el que sea factible la ocurrencia de acuerdo entre los bandos enfrentados, y los términos del conflicto se resuelvan al interior del sistema político. Un orden tal en el que fuese posible alcanzar una solución a las diferencias, al menos de manera temporal. Solución que esté sujeta a unas normas que regulen, incluso, su modificación; así, es posible incluso modificar el “acuerdo”, respetando los procedimientos establecidos para ello.

Se trata, en nuestra opinión, de evitar uno de los cinco resultados institucionales posibles –según Przeworski– en situaciones de transición democrática: “1. La estructura de los conflictos es tal que ningún tipo de instituciones democráticas puede perdurar y las fuerzas políticas acaban luchando por una nueva dictadura” (Przeworski, 1995:87). Percibimos, por tanto, la coyuntura política venezolana, como propia de un período de transición política, en el cual el énfasis colocado sobre los factores conflictivos del debate político amenaza la existencia de los factores democráticos ya vigentes, y aumenta las posibilidades de ocurrencia de un conflicto social y político abierto.

---

<sup>39</sup> Interpretamos en este sentido, la siguiente aseveración: “...La democracia suscitará un acatamiento generalizado, se impondrá por sí sola, cuando todas las fuerzas políticas significativas cuenten con una determinada probabilidad mínima de conseguir resultados favorables bajo ese sistema particular de instituciones” (Przeworski, 1995:51).

Una de las primeras acciones que habría de emprender para superar la actual situación de estancamiento político en Venezuela, es moderar el tono del discurso, imponer responsabilidad en la conducta de los formadores de opinión pública y evitar las descalificaciones y las alusiones personales. Moderar el volumen y la carga de violencia contenida en el discurso contribuiría decisivamente a generar un espacio propenso al diálogo y al logro de acuerdos.

Por otra parte, se hace necesario reducir los componentes subjetivos e irracionales prevalecientes en el debate político que se desarrolla en Venezuela, así como elevar el grado de especialización y conocimiento, con el cual la población participa en la política y en la toma de decisiones públicas o colectivas, lo que no debe implicar la exclusión del componente popular de espacios abiertos a su participación, sino la comprensión del proceso político como un mecanismo de formación cívica que prepara al ciudadano para hacer efectiva la vigencia de la democracia, contando con su participación responsable y su mayor conciencia de los peligros y riesgos de la democracia.<sup>40</sup> El logro de este objetivo implicaría el fortalecimiento de organizaciones políticas e intermedias que tengan como propósitos la canalización de fines políticos y la promoción de intereses especiales, valores democráticos y actitudes cívicas a los que hemos aludido.

Esto implica superar discursos excesivamente llenos de “apelaciones” y fra-seología pretendidamente revolucionarias, invocaciones en las cuales puede ocultarse más bien una intención oportunista,<sup>41</sup> ya que se ha constatado la sensibilidad al halago de algunos funcionarios. Y, del otro lado, la manipulación de mitos o temores inveterados de la población para reforzar una política conservadora o reaccionaria.

Además de estas condiciones, digamos subjetivas, es necesario crear estructuras o instituciones que hagan estable y predecible, en cierta medida, el funcionamiento del sistema político venezolano, así como efectiva la vigencia de las normas que lo rigen.<sup>42</sup> Se trata de superar la situación en la cual la calle y los

<sup>40</sup> Como señala Przeworski, el resultado de una democracia consolidada es sólo una de las posibilidades, es decir, los riesgos son muchos. La bondad de este resultado no es suficiente para su éxito; véase Przeworski (1995), especialmente, el capítulo 2. Puede verse también el trabajo de Alfred Stepan, en O'Donnell y Schmitter (1994, vol. 3:105-35).

<sup>41</sup> Particularmente, “...En los regímenes con un discurso ritualizado, donde todo el mundo cumple el paripé de pronunciar palabras en las que no cree y que no espera que nadie crea...” (Przeworski, 1995:99).

<sup>42</sup> “...La democracia está consolidada cuando la mayor parte de los conflictos se dirime por medio de las instituciones democráticas, cuando nadie puede controlar los resultados *ex post* y éstos no están predeterminados

medios de comunicación son los escenarios en los cuales se dirige preferentemente la política, y en la cual algunos actores corporativos tienen un peso absoluto demasiado importante en el desarrollo y desenlace del proceso político, así como incentivos para preferir la adopción de estrategias de confrontación y violencia, en lugar de estrategias de cooperación y acuerdo. Se trata de “reinstitutionalizar” el debate político en Venezuela, lo cual contribuiría a generar mayor estabilidad en el proceso y los resultados del sistema político venezolano. Dentro de estos esfuerzos de reinstitucionalización destaca el reforzamiento del control sobre la Fuerza Armada, la imposición de valores de paz y civilidad al interior de la sociedad, la defensa de las leyes y de las instituciones, con el fin de asegurar la convivencia democrática en el largo plazo y contener las tentaciones de interrupción de su funcionamiento democrático. Este asunto implica, además, reforzar la profesionalización de la Administración Pública y su carácter civil, dadas las complicaciones que implica el mando militar en instituciones relacionadas con civiles, la distorsión de las normas de comportamiento entre civiles y militares y la confusión de las estructuras de mando militar en la estructura civil; en particular, cuando involucra la participación de otros miembros de la Fuerza Armada en la gestión pública en el ámbito civil (véase Norden en Ellner y Hellinger, 2003).

Un paso importante para superar la polarización que impera podría ser la promoción de cierto pluralismo político, social u organizacional,<sup>43</sup> entre otras maneras, fomentando la creación de organizaciones intermedias y medios de expresión de intereses sociales autónomos, sobre todo si reconocemos la crisis de las organizaciones sociales, gremios, sindicatos y partidos políticos que acompañó la del sistema político venezolano existente al momento de la designación como presidente de Hugo Chávez. Sin embargo, el fomento del pluralismo no es

---

*ex ante*, son relevantes dentro de ciertos límites predecibles y suscitan el acatamiento de las fuerzas políticas significativas” (Przeworski, 1991:86). Ver también Przeworski (1995).

<sup>43</sup> Véanse Lijphart (1989); Lipset (1959); Lipset y Rokkan (s.f.); Dahl (1971). “...(L)a democracia propicia el pluralismo, es decir, un sistema compuesto por una multiplicidad de organizaciones en competencia y superpuestas que actúan autónomamente (unas de las otras y frente al Estado) al momento de determinar las categorías que dicen representar y las tácticas que emplearán para promover sus intereses” (Przeworski, 1995:89). “...La creación de canales regulares para la expresión de conflictos de intereses ha ayudado a estabilizar la estructura de un gran número de Estados-nación...La apertura de canales para la expresión de conflictos manifiestos o latentes entre las clases asentadas y las subprivilegiadas puede haber desequilibrado algunos sistemas en su primera fase pero, a la larga, fortaleció el cuerpo político” (Lipset y Rokkan, s.f.:235).

Este sería el esquema institucional más adecuado para una democracia mayoritaria y “participativa”, como la que se pretende imponer en Venezuela, a la cual se busca incorporar rasgos de un modelo de democracia unificadora o consociativa (*consociational democracy*) como una condición para acentuar los rasgos democráticos, posibilidades de estabilidad y mayor eficacia del sistema político.

suficiente, sino una condición para reducir la polarización, desarrollando una red de intereses y vínculos sociales adicionales, con el fin de rellenar el espacio político vaciado por la contradicción central entre los principales bandos en disputa, atenuando el grado de conflicto social y ganando en representatividad de las diferencias sociales y políticas por parte del sistema político. Este auge organizacional debe ser acompañado por la generación de acuerdos políticos entre estos grupos, que puedan moderar algo el pluralismo organizacional, creando una coalición amplia y estable entre ellos.<sup>44</sup> Se trata más bien de promover el surgimiento de grupos que compartan ciertos valores y patrones culturales (“grupos sobrepuestos”) y que puedan, por lo tanto, coexistir lealtades “cruzadas” diversas entre los miembros de una sociedad<sup>45</sup> (véase Lijphart, 1989). Los partidos políticos, instituciones especializadas en agregar intereses diversos en la sociedad, tendrían una importancia evidente en el logro de este objetivo, por lo que se haría necesario rescatar a estas instituciones del estado actual de crisis en el que se encuentran y fortalecerlos.

Hay que fomentar, además, una cultura de tolerancia y respeto a las diferencias, defensa de la legalidad—esto excluye las opciones extralegales e inconstitucionales— en la promoción de los intereses propios y una disposición al establecimiento de acuerdos y pactos.<sup>46</sup> Abandonar las interpretaciones unilaterales e intentar en lo posible—especialmente cuando esto parece realista— incorporar diferentes visiones sobre un asunto; actuar de manera incluyente e integradora favorecerá la estabilidad e inclusión global del sistema político (ver Lijphart, 1989, 2000). Atenderíamos, así, un requisito central para la instauración de democracias, las cuales serían siempre el resultado de negociaciones, independientemente del hecho de que la liberación inicial de un régimen autoritario no haya sido concertada, aunque los actores sociales de esta negociación puedan variar o no incluir a todos (Przeworski, 1995).

<sup>44</sup> Los estudios reconocen que para que pueda lograrse alguna estabilidad en un contexto de marcado pluralismo, es necesario, entre otras condiciones, algún grado de equilibrio entre las fuerzas en conflicto, por lo tanto, que no haya posibilidad de que alguna pueda imponerse finalmente sobre las otras, así como destaca también la disposición de sus dirigentes a llegar a compromisos o acuerdos. Véase Dahl (1971); Lijphart (1989; 2000); O’Donnell y Schmitter (1994), Przeworski (1995).

<sup>45</sup> En caso contrario, “...cuando una sociedad está hendida por agudas divisiones y cuando sus miembros y lealtades no se superponen sino que se concentran exclusivamente dentro de cada sector separado de la sociedad, las presiones entrecruzadas que son vitales para la moderación y estabilidad política estarán ausentes...” (Lijphart, 1989:22).

<sup>46</sup> “La estabilidad política de las democracias unidas debe ser explicada en términos de un factor adicional—cooperación de los líderes de los diferentes grupos que trasciende las divisiones sectoriales o subculturales al nivel popular...” (Lijphart, 1989:27).

Este propósito se conecta necesariamente con la actitud de las instituciones ante la(s) minoría(s) política(s), es decir, principalmente, ante la oposición. Destaca la necesidad de atender la representación proporcional en la conformación institucional, particularmente en los órganos colegiados de gobierno. Dadas las economías crecientes de escala que implica el acceso y uso del poder, “...el poder es un monopolio natural, pues sus dividendos son proporcionales a su magnitud... De modo que para que la democracia no termine en dictadura *de facto*, las instituciones democráticas deben... proteger el derecho de las minorías...” (Przeworski, 1995:70). Resulta conveniente equilibrar el objetivo de garantizar la unidad y efectividad del gobierno, con el logro de un mayor nivel de representación e inclusión de las diferentes opiniones e intereses sociales. En particular, la forma como se ha asegurado el predominio del principio de la mayoría en la conformación de los órganos colegiados, tales como el Poder Legislativo, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, entre otros; y la manera inapropiada como se han dirimido las diferencias políticas entre los diferentes sectores al interior del sistema político venezolano,<sup>47</sup> han generado como resultado la ausencia en estos órganos de una representación adecuada de la diversidad de la opinión pública y de intereses sociales clave, en particular de aquellos que constituyen actualmente minorías, lo cual les deja sin “voz” ni capacidad para influir sobre la formación de políticas públicas al interior de los mismos. Esta situación se ha agravado recientemente por la “autoexclusión” de los miembros de la oposición política en las últimas elecciones de autoridades regionales y miembros del Parlamento del año 2005.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Una muestra de la manera inapropiada como se ha manipulado electoralmente el principio de la representación proporcional de las minorías, tanto por sectores políticos asociados con la oposición como por otros del gobierno, aunque el gobierno ha sido más efectivo en su uso, extendiéndolo al ámbito nacional, consiste en la adopción de un mecanismo denominado “morochas”, a través del cual una organización partidista con existencia más formal, que real o práctica, sirve a las organizaciones mayoritarias con su tarjeta para postular sus candidatos en circunscripciones uninominales, de manera que la representación obtenida a través de ésta no sea considerada a la hora de asignar los cargos en disputa, a través de la proporcionalidad, a las diferentes listas presentadas, consiguiendo con ello una sobrerrepresentación de la mayoría, en la conformación de los órganos deliberantes o colegiados. Esto ha sido particularmente explícito en las últimas elecciones regionales y parlamentarias de 2005, lo cual motivó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, que decidió en contra de invalidar este método en las últimas elecciones. Véase la decisión en <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/enero/74-250106-05-1786.htm>.

<sup>48</sup> Aunque la información suministrada por el CNE refiere que sólo 10% de los candidatos de la oposición formalizaron, finalmente, su renuncia a la postulación, el llamado de la mayoría de los partidos de oposición a no participar en las últimas elecciones parlamentarias, faltando sólo días para su realización, tuvo un gran efecto desmovilizador, aunque seguramente este efecto no se limitó a sus simpatizantes. En todo caso, la abstención alcanzó niveles históricos, entre 70%-75%, y la mayoría gubernamental bastó para obtener la totalidad de las plazas en disputa ([www.cne.gov.ve](http://www.cne.gov.ve)).

Una condición final, sin embargo clave, que restaría –en nuestra opinión– para la construcción de viabilidad política al proyecto institucional de más democracia (política, social y económica) que persigue implantarse en Venezuela, sería el reconocimiento por todos los actores políticos nacionales relevantes de la conveniencia de rechazar la intervención de agentes extranjeros –con implicaciones desestabilizadoras– en el debate político nacional. La finalidad de estos acuerdos sería la de reforzar la unidad nacional, aumentar el grado de consenso político y social, y construir los sustentos de un acuerdo institucional sobre las normas básicas del sistema, permitiendo, sin embargo, que el resultado del juego entre las distintas fuerzas políticas permanezca abierto y se instale sobre términos competitivos, lo que implica reforzar su legitimidad y representatividad frente a las fuerzas desestabilizadoras.

### 3. CONCLUSIONES

Hemos pretendido caracterizar el debate político actual en Venezuela, sobre la base de sus aspectos disfuncionales, esto es, aquellos que lo mantienen estancado o entrapado y acentúan los rasgos conflictivos existentes en la sociedad venezolana, con consecuencias esperables sobre la estabilidad y evolución del sistema político. Polarización, desinstitucionalización y degradación del debate, subestimación de saberes y experiencias, irracionalidad, oportunismo, apelación a las Fuerzas Armadas, excesiva concentración en la personalidad del Presidente e intervención de factores internacionales serían los rasgos negativos principales del debate político en Venezuela. El análisis realizado no agota, sin embargo, todas las posibilidades; destaca sólo las que hemos advertidos como principales, haciendo énfasis en el espacio político y los rasgos que debe reunir una posición progresista o de izquierda en la actualidad política venezolana.

Todo esto en el marco de un sistema político democrático y plural, atributos que pasan a estar necesariamente implicados mutuamente, y pueden contribuir a mejorar la calidad de la gestión pública y la estabilidad general del sistema político venezolano. Además, los cambios ocurridos en el ámbito mundial, particularmente, en los que fueron conocidos como los regímenes socialistas “realmente existentes”, han tenido un innegable impacto sobre la manera como se define la izquierda, un cambio que no se puede obviar adoptando posiciones inmovilistas o reaccionarias, nostálgicas de una visión “ideologizada” –en términos de falsa conciencia– del pasado.

Las opciones propuestas constituirían las bases de un acuerdo institucional que persigue ofrecer estabilidad y mayor cohesión social en torno al proyecto de más democracia (política, económica y social), planteado en la actual coyuntura para Venezuela, especialmente ante las consecuencias potencialmente desestabilizadoras de los rasgos destacados del debate político.

## BIBLIOGRAFÍA

ANDERSON, P.; N. Bobbio y H. Cerroni (1993). *Socialismo, liberalismo, socialismo liberal*. Caracas: Editorial Nueva Sociedad.

ARENDRT, H. (1987). *Los orígenes del totalitarismo*. Madrid: Alianza Editorial, vol. 3, 2ª edición.

AROCENA, R. (2005). “Uruguay en la nueva ola de las izquierdas latinoamericanas”. *Nueva Sociedad*, n° 197, pp. 146-58, Caracas.

\_\_\_\_\_ (1996). “La izquierda ante la decepción”. *Nueva Sociedad*, n° 141, pp. 70-8, Caracas.

BOBBIO, N. (1997). *Ni con Marx ni contra Marx*. México: Fondo de Cultura Económica, 1999 (Título original: *Né con Marx né contra Marx*. Traducción: Lía Cabbib Levi e Isidro Rosas Alvarado).

\_\_\_\_\_ (1978): *¿Qué socialismo?* Barcelona: Plaza & Janés Editores.

BOBBIO, N. y N. Matteucci (1981). *Diccionario de política*. México: Siglo XXI editores.

BOSETTI, G., comp. (1996). *Izquierda punto cero*. Barcelona (España): Paidós.

BRESSER-PEREIRA, L.C. (2000). “The new left: A view from the South”, Documento accessible on line en [www.bresserpereira.org.br](http://www.bresserpereira.org.br)

CABALLERO, M. (2006). “Ignorancia, falsificación y adulación”. *El Universal*, Caracas, 09 de enero de 2006, p. 1-6.

CANACHE, D. (2002). “From bullets to ballots: The emergence of popular support for Hugo Chávez”. *Latin American Politics and Society*, vol. 44, n°1, pp. 69-90.

CARR, E.H. (1958). *Historia de la Rusia soviética. El socialismo en un solo país (1924-26) (I)*. Madrid: Alianza Editorial, 1974.

CARRASQUERO, J.V. y F. Welsch (2000): “Opinión pública y cultura política en Venezuela: la consolidación del “chavecismo”, en *Opinión pública y elecciones en América*. Caracas: Universidad Simón Bolívar-International Political Science Association, pp. 173-90.

CAVAROZZI, M. (1996). *El capitalismo político tardío y su crisis en América latina*. Rosario-Argentina: Ediciones Homo Sapiens.

CHERESKY, I. e I. Pousadela, comps. (2001). *Política e instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas*. Buenos Aires: Paidós.

CISNEROS RAMÍREZ, I. (1996). “El espacio normativo de la izquierda y la nueva geometría de la política”. *Nueva Sociedad*, n° 141, pp. 82-93, Caracas.

COLÁS, A. (1996). “La izquierda y lo internacional”. *Nueva Sociedad*, n° 141, pp. 94-103, Caracas.

COTARELO, R. (1995). “Crisis y hundimiento del comunismo”, en F. Vallespín, ed., *Historia de la teoría de la política*, vol. 6, 1ª reimpresión. Madrid: Alianza Editorial, 1997.

DAHL, R.A. (1971). *La poliarquía. Participación y oposición*. Madrid-Barcelona: Guadiana de Publicaciones, 1974 (Título original: *Poliarchy. Participation and opposition*. Traducción: Julia Moreno).

DEL BÚFALO, E. y M. Geoffrey (2001). *Un marxismo maldito*. Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

DUCH, J.P. y C. Tello, comps. (1991). *La polémica en la URSS. La Perestroika seis años después*. México: Fondo de Cultura Económica.

EL TROUDI, H. (2005). *El salto adelante*. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República.

ELLNER, S. (2005). *Neoliberalismo y antineoliberalismo en América Latina: el debate sobre estrategias*. Caracas: Fondo Editorial Tropykos.

ELLNER, S. y D. Hellinger (2003). *Venezuela politics in the Chavez era. Class, polarization, and conflict*. Boulder-Londres: Lynne Rienner Publisher.

GARRETÓN, M.A. (2005). “Reflexiones en torno de la(s) izquierda(s) chilena(s) y el proyecto de país”. *Nueva Sociedad*, n° 197, pp. 159-71, Caracas.

GIDDENS, A. (2001). *La tercera vía y sus críticos*. Madrid: Grupo Santillana de Ediciones.

\_\_\_\_\_ (1999). *La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia*. Madrid: Grupo Santillana Ediciones.

GOODMAN, L.W. *et al.*, eds. (1995). *Lessons of the Venezuelan experience*. Washington-Baltimore-London: The Woodrow Wilson Center Press and The Johns Hopkins University Press.

GORBACHOV, M. (1987). *Perestroika. Nuevo pensamiento para mi país y el mundo*. S/l. S/e.

HIRSCHMAN, A.O. (1996). *Tendencias autosubversivas. Ensayos*, 1ª edición en español. México: Fondo de Cultura Económica.

\_\_\_\_\_ (1994). *Retóricas de la intransigencia*. México: Fondo de Cultura Económica, 1ª reimpresión.

\_\_\_\_\_ (1986). *Interés privado y acción pública*. México: Fondo de Cultura Económica.

\_\_\_\_\_ (1984). *De la economía a la política y más allá*. México: Fondo de Cultura Económica.

LIJPHART, A. (2000). *Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países*. Barcelona (España): Editorial Ariel.

\_\_\_\_\_ (1989). *Democracia en las sociedades plurales. Una investigación comparativa*. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.

LINZ, J.J. (1996). *La quiebra de las democracias*. Madrid: Alianza editorial. 4ª reimpresión.

LIPSET, S.M. (1959). “Algunos requisitos sociales de la democracia: desarrollo económico y legitimidad”, en AA.VV. *Diez textos fundamentales de ciencia política*. Barcelona: Editorial Ariel, 1992, pp.113-50.

LIPSET, S.M. y S. Rokkan (s/f). “Estructuras de división, sistemas de partidos y alineamientos electorales”, en AA.VV. *Diez textos fundamentales de ciencia política*. Barcelona: Editorial Ariel, pp. 231-73, 1992.

LÓPEZ MAYA, M. (2005). *Del Viernes Negro al referendo revocatorio*. Caracas: Alfadil Ediciones.

\_\_\_\_\_ (1999). “La protesta popular venezolana entre 1989 y 1993 (en el umbral del neoliberalismo)”, en M. López Maya, ed. *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América latina en los años de ajuste*. Caracas: Editorial Nueva Sociedad, pp. 209-35.

LOWI, T.J. (1993). *El presidente personal. Facultad otorgada promesa no cumplida*. México: Fondo de Cultura Económica.

LOZADA, M. (2004). “El otro es el enemigo: imaginarios sociales y polarización”, *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 10, n° 2, pp. 195-209, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

MAGALLANES, R. (2005). “La igualdad en la República Bolivariana de Venezuela (1999-2004)”. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 11, n° 2, pp. 71-99, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

\_\_\_\_\_ (1999). “La economía política del ajuste ortodoxo. Análisis de un caso: Venezuela (1989-1993)”. *Politeia*, n° 23, pp. 29-71, Universidad Central de Venezuela, Instituto de Estudios Políticos.

MAGDALENO, J. (2005). ¿Cómo mejorar la gobernabilidad en una sociedad políticamente dividida?, en M. Ramírez Ribes (compilación y prólogo). *Gobernanza, laberinto de la democracia. Informe del Capítulo Venezolano del Club de Roma*. Caracas: Club de Roma: Capítulo venezolano, pp. 173-84.

MARCANO, C. y A. Barrera Tyszka (2005). *Hugo Chávez sin uniforme*. Caracas: Grupo Editorial Random House Mondadori.

MARX, C. y F. Engels (1974). *Obras escogidas*. Tomo III, reimpresión 1986. Moscú: Editorial Progreso.

MOLEIRO, A. (2006). “El renacimiento de la derecha en Venezuela”. *El Nacional*, Caracas, domingo 26 de marzo, p. A-6.

MOLINA VEGA, J.E. (2001). “Comportamiento electoral en Venezuela 1998-2000: cambio y continuidad”, en *Venezuela en transición: elecciones y democracia 1998-2000*. Caracas: Red Universitaria de Estudios Políticos de Venezuela –RedPol– CDB Publicaciones, pp. 188-213.

MOLINA VEGA, J.E. y A.E. Álvarez Díaz, coords. (2004). *Los partidos políticos venezolanos en el siglo XXI*. Caracas-Valencia (Venezuela): Vadell Hermanos Editores.

O’DONNELL, G. y P.C. Schmitter (1994). *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*. Barcelona- Buenos Aires: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.-Editorial Paidós, SAICF, Vols. 3-4, 1ª reimpresión.

PETKOFF, T. (2005). “Las dos izquierdas”. *Nueva Sociedad*, n° 197, pp. 114-28, Caracas.

PIPES, R. (2002). *Historia del comunismo*. Barcelona: Grupo Editorial Random House Mondadori.

PRZEWORSKI, A., coord. (1998). *Democracia sustentable*. Buenos Aires: Editorial Paidós, SAICF.

\_\_\_\_\_ (1995). *Democracia y mercado. Reformas políticas y económicas en la Europa del Este y América Latina*. New York: Cambridge University Press, Organización Editorial de la Universidad de Cambridge.

REYES R., A. (2006). “No puedes combatir a Chávez con algo parecido a él”. *El Nacional*, Caracas, lunes 20 de marzo, p. A-6.

RED UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS POLÍTICOS (RedPol) (1999). *Boletín RedPol. Elecciones y democracia en la hora constituyente*. Mayo. Con el patrocinio del Conicit y Banco Interamericano de Desarrollo.

RODRÍGUEZ, I. (2005). *Abril comienza en octubre*. Caracas: Grabados Nacionales, C.A.

RODRÍGUEZ GARAVITO, C.A.; P.S. Barret y D. Chávez, eds. (2005). *La nueva izquierda en América Latina. Sus orígenes y trayectoria futura*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

ROMERO, A. (2006). “Todo lo que no procede de una convicción es pecado”. *El Nacional*, Caracas, 26 de enero, p. A-6.

SALAMANCA, L. (1999). “Protestas venezolanas en el segundo gobierno de Rafael Caldera: 1994-1997”, en M. López Maya, ed. *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años de ajuste*. Caracas: Editorial Nueva Sociedad, pp. 237-62.

SÁNCHEZ GARCÍA, A. (2006). “Elecciones limpias o caos y desintegración. Marcel Granier ante las elecciones de diciembre. Entrevista a Marcel Granier”. *ZETA*, N° 1554, 17 de marzo de 2006, pp. 10-3, Caracas.

STIGLITZ, J.E. (2003). *Los felices 90. La semilla de la destrucción*. Madrid: Santillana Ediciones Generales (Título original: *A new history of the world's most prosperous decade*. Traducción: Victoria Gordo del Rey y Moisés Ramírez Trapero).

\_\_\_\_\_ (2002). *El malestar en la globalización*. Madrid: Santillana Ediciones Generales.

SUCRE HEREDIA, R. (2004). “La política militar en la Constitución de 1999. ¿Cambio o continuidad?”, en L. Salamanca y R. Viciano Pastor, eds. *El sistema político en la Constitución Bolivariana de Venezuela*. Valencia (Venezuela): Vadell Hermanos editores, pp. 487-516.

TORRES, A. (1990). “La evolución de la actitudes hacia el sistema político en Venezuela,” en Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre). *Venezuela, democracia y futuro*, pp. 173-85, Caracas.

VILAS, C.M. (2005). “La izquierda latinoamericana y el surgimiento de regímenes nacional-populares”. *Nueva Sociedad*, n° 197, pp. 84-99, Caracas.

WELSCH, F. y J.V. Carrasquero (1996). “¿Desconsolidación de la democracia en Venezuela? Rendimiento y legitimidad normativa”. *Cuestiones Políticas*, n° 16, pp. 45-69, Maracaibo, La Universidad del Zulia.